

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 011- 2015 00389 01 promovido por **JANNETH LILIANA TANGARIFE MONTOYA** contra **COLPENSIONES**, a resolver el recurso de apelación presentando por la parte demandada, frente a la sentencia condenatoria emitida el 27 de junio de 2016 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, al igual que el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 69 del CPTYSS.

La decisión se adopta de forma escrita, de conformidad a las previsiones del decreto legislativo 806 de 2020, la cual fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala mediante providencia número **056** de 2021.

ANTECEDENTES

La señora Janneth Liliana Tangarife demandó a Colpensiones, para que se le condene al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 26 de diciembre

de 2001, intereses moratorios del art 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación y costas, teniendo como causa la prestación pretendida, el fallecimiento de su padre.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que su padre Fabio de Jesús Tangarife Molina falleció el 26 de diciembre de 2001, encontrándose pensionado por invalidez de origen común, mediante resolución 010929 de 1997 emitida por el ISS hoy Colpensiones. En resolución 008485 de 2002 se reconoció pensión de sobrevivientes a su madre y hermano Liliam Montoya García y Héctor Fabio Tangarife Montoya. La primera falleció el 4 de junio de 2011 y el segundo es mayor de edad y no es estudiante.

Afirma la accionante que padeció poliomielitis en su infancia, siendo valorada por el ISS con un 61,45% de PCL con fecha de estructuración 13 de agosto de 1976, y que era el causante quien en vida velaba por su sustento económico en tanto no recibía ningún tipo de ingreso, por lo que dependía en forma total y absoluta de su padre. El 21 de diciembre de 2012 solicitó la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre y le fue negada en resolución GNR 206938 del 14 de agosto de 2013 por no aportar documentación idónea para demostrar la convivencia y dependencia económica respecto del causante. La cual fue confirmada en resolución VPB 11837 del 23 de julio de 2014.

La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación demandada, prescripción, buena fe, improcedencia de las condenas pretendidas.

En **sentencia del 27 de junio de 2016**, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín condenó a la accionada a reconocer y pagar a la accionante, i) la pensión de sobrevivientes de origen común a partir del 5 de junio de 2011, en calidad de hija invalida supérstite. ii) \$43.335.458 por retroactivo pensional causado del 5 de junio de 2011 al 30 de junio de 2016. A partir del 1 de julio de 2016 ordenó continuar pagando una mesada del SMLMV, con las mesadas de junio y diciembre. iii) intereses

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 de febrero de 2013 hasta el pago, y las costas, fijando agencias en \$3.447.275. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción. Autorizó los descuentos en salud.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión, la parte demandada presentó recurso de apelación indicando que de la prueba testimonial se pudo deducir que la demandante tiene un auto sostenimiento económico, que los recursos que recibe en este momento no son esporádicos, ni ocasionales, sino que son fijos y periódicos. Solicita se analice una posible incompatibilidad entre la pensión reconocida en la sentencia y la reconocida por Colpensiones por el fallecimiento de su madre ya que en ambas pensiones se están relatando los mismos hechos, un estado de invalidez y una dependencia económica por lo que estaría recibiendo ambas pensiones que son administradas y financiadas por la misma entidad, y es a la misma persona que se le están entregando estas dos pensiones.

EL PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si a la señora Janneth Liliana Tangarife Montoya le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme a la Ley 100 de 1993, en calidad de hija discapacitado del causante. Así mismo, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, se revisará la procedencia o no de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

Se probó en este caso, que el señor Fabio de Jesús Tangarife Molina fue pensionado por invalidez de origen común a partir del 30 de agosto de 1996, mediante resolución No. 010929 de 1997¹. Y falleció el 26 de diciembre de 2001².

En este contexto, las normas aplicables son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, indicando el literal b) del artículo 47, que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez”. Se demostró con la documental glosada en folio 14, la filiación del causante Fabio de Jesús Tangarife Molina respecto a su hija demandante.

Según dicha norma, la calidad de beneficiaria invocada por la demandante le exige para la causación del derecho, **i)** condición de invalidez para el momento del fallecimiento del causante, la cual está acreditada con el dictamen pericial No. 6337 del 18 de septiembre de 2012³, que le otorgó una PCL del 61,45% estructurada a partir del 13 de agosto de 1976. Y **ii)** dependencia económica de esta respecto del causante, para el momento del deceso.

Frente a la segunda exigencia, es importante precisar que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en múltiples pronunciamientos, y la Honorable Corte Constitucional (mediante sentencia C-111 de 2006), han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento; han precisado además, que tal situación no tiene que ser total y absoluta, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho no puede exigirse la configuración de estados de indigencia, pero, si debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación

¹ Fl. 11

² Fl.10

³ Fl.18

considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial⁴, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de éstos asuntos:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

En este caso, la entidad accionada al negar la prestación solicitada por la accionante, indicó en la resolución GNR 206938 del 14 de agosto de 2013, que esta “no apporto (sic) la documentación idónea para demostrar su convivencia y dependencia económica del causante”⁵. Y en la resolución VPB 11837 del 23 de julio de 2014⁶ confirmó la anterior porque no se encontró en el expediente pensional “Declaración de dependencia económica”.

Razón por la cual procederá la Sala con el análisis de la prueba obrante en el proceso para determinar si el supuesto de la dependencia económica fue demostrado, aclarándose que el de convivencia no es exigible en la norma aplicable a este caso.

En el interrogatorio de parte expuso la señora Janneth Liliana Tangarife Montoya que es ama de casa, está afiliada a Sura por su madre, tiene un hermano. Como herencia la mamá les dejó una casa y con eso sobreviven, a parte de esa casa la mamá le dejó

⁴ La cual se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9/06/2010, ratificada en las sentencias 35.991, 37.595 y 42.792 de 2011; SL 9640 y SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015, SL 11871 y SL 10256 de 2017, SL 3514-2018 del 15/08/2018, entre otras

⁵ Fl.21

⁶ Fl.26-27

pensión y recibe mensualmente \$500.000. Al momento del fallecimiento de su padre vivía con este, su madre y su hermano Héctor, en vida de su padre este veía por ella porque no podía trabajar por su discapacidad porque todo se le caía de las manos y vivía en el suelo, su padre llevaba toda la responsabilidad. En vida de su padre la madre ayudaba económicamente en el hogar, pero prácticamente era el padre quien llevaba la obligación. En vida del padre, el hermano Héctor no le ayudaba económicamente a la accionante, la pensión que le dejó su madre la destina a los gastos. Afirma que tiene una hija y no convivió con el padre de esta porque él no respondió por ella. Su hija tenía un año cuando falleció el padre de la accionante.

Al confrontar el interrogatorio con la prueba documental, se evidencia que al fallecimiento del causante, mediante resolución 008485 de 2002⁷ le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a Liliam Montoya García y Héctor Fabio Montoya Tangarife, en calidad de cónyuge e hijo del causante respectivamente.

El 4 de junio de 2011 falleció la señora Liliam Montoya García⁸, y en resolución GNR 123969 del 6 de junio de 2013⁹, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a la accionante a partir del 4 de junio de 2011 en cuantía de un SMLMV, por el fallecimiento de su madre.

Si bien indicó la recurrente que la demandante tiene un auto sostenimiento económico, que los recursos que recibe en este momento no son esporádicos, ni ocasionales, sino que son fijos y periódicos, se reitera que para acreditar el derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor Fabio de Jesús Tangarife Molina, a la demandante le basta demostrar subordinación económica relevante, esencial y preponderante frente al causante para el momento del fallecimiento de este.

Se procedió con el análisis de la prueba testimonial, con el fin de verificar si resulta conducente para orientar el convencimiento de la Sala en torno a la existencia de la dependencia económica de la señora Janneth Liliana Tangarife Montoya respecto a su

⁷ Fl.12

⁸ Fl.13

⁹ Fl. 53-54

padre fallecido, para ello se acogió las directrices plasmadas por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil¹⁰, para concluir que las versiones de BERNARDO DE JESÚS CASTAÑO OBANDO y AMANDA MEJÍA DE COLORADO son conducentes y pertinentes para orientar el convencimiento judicial, en torno a la existencia del requisito de dependencia económica.

Además, los declarantes resultan hábiles para la práctica de la prueba, al no estar incursos en el régimen de inhabilidades para testimoniar previsto en el artículo 210 CGP, y es evidente la existencia de un conocimiento directo, relevante y convincente en torno a los hechos determinantes para la resolución judicial de éste litigio, en tanto se advierte que sus versiones presentan coherencia entre si y frente al dicho dela demandante, además resultan responsivas, creíbles y completas por las siguientes razones:

El señor BERNARDO DE JESÚS CASTAÑO OBANDO, conoce a la demandante hace por ahí 40 años¹¹, la conoció por sus padres. Al padre lo conoció desde que el deponente trabajaba en la mayoritaria, porque este iba a comprarle verduras para llevar para la casa. Dice que el causante falleció hace más o menos 15 años de diabetes. El deponente y el causante eran vecinos en Guayabal, visitaba el hogar del fallecido una o dos veces en la semana, vivían a tres casas. Afirmó que al fallecer Fabio, padre de la demandante, vivía con esta, la esposa, el hijo y la nieta. En vida de Fabio, la esposa de este le ayudaba a la esposa del testigo a pulir. Los gastos del hogar eran pagados con la pensión del causante quien veía por la casa con la pensión.

Es enfático al indicar que el causante veía por la hija, la señora, la nieta y que llevaba todos los gastos de la casa, lo sabe porque lo veía cada rato comprar las cositas para los hijos y el mercado para la casa. Informa que al momento del fallecimiento de Fabio, la demandante era muy invalida de las manos, tenía poliomielitis, se dicaba a la casa y a ayudarle a la mamá. El hermano era menor de edad y estudiaba al momento

¹⁰ En la sentencia 4978 del 5/05/1999

¹¹ La audiencia en la que rinde declaración fue celebrada el 27 de junio de 2016, lo que implica que conoce a la demandante desde el año 1976. El causante fallece el 26 de diciembre de 2001

del fallecimiento del padre, la esposa del falleció ganaba muy poquito con lo que hacía en confecciones y demás que se lo gastaba en la casa ayudándole al esposo.

Agrega que siguió en contacto con la familia luego de la muerte de Fabio, no sabe si por el fallecimiento de este alguno solicitó pensión. Cree que la pensión del fallecido era del mínimo, este no recibía otros ingresos, lo poquito que recibía se lo gastaba en la casa. La demandante tiene una casita que le dejaron sus padres y con un arriendito que le pagan medio vive con eso, no sabe si recibe pensión. Finalmente indica que la demandante solo recibía ayuda de los padres en vida de estos. Sabe todo lo informado porque eran vecinos y prácticamente todos los días dialogaba con el causante.

Por su parte la señora AMANDA MEJÍA DE COLORADO conoce a la demandante porque hace 25 años fue vecina de ella y de su familia. La deponente tenía unas confecciones y pulía, la mamá de la demandante iba a su casa de vez en cuando a ayudarle con la pulida y lo que se hacía se le pagaba. Dice que el padre de la accionante falleció hace como 15 años, momento para el cual el hijo Héctor era un bebé, la demandante era invalida y Claudia era casada y no vivía en la casa sino con el esposo.

Si bien indicó que tenía entendido que él era pensionado y era el que veía por el hogar porque la mamá de la demandante se lo comentó, lo que en principio la convierte en un testigo de oídas, no puede pasar por alto esta Sala que luego aseguró que visitó el hogar de la accionante y que estaba compuesto por los padres y los 3 hijos incluida la demandante y su hija, que la obligación del hogar la llevaba el fallecido, él era quien entraba el mercado. Afirmó que veía que el padre de la demandante mercaba para el hogar y llevaba la obligación. Reiteró que veía que el fallecido era el que llevaba los gastos del hogar, vivían a las 3 casas, se frecuentaban 2 o 3 veces a la semana.

No sabe si después del fallecimiento solicitaron pensión. Los padres de la demandante dejaron 2 casas, donde vive la demandante y otra que tiene arrendada, tiene entendido que de arriendo recibe como \$350.000. La demandante tiene una niña, nunca vivió con el padre de su hija, no sabe si la demandante está pensionada. Sabe todo lo informado porque lleva muy buena relación con la demandante, la ha querido mucho por la

invalidéz que tiene y siempre ha estado pendiente de ella y conoció muy bien a su madre.

De la prueba analizada se advierte que los deponentes fueron responsivos, en la medida en que todas las cuestiones abordadas recibieron una respuesta adecuada; son creíbles por no omitir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, cómo sucedieron los mismos y cómo llegaron a su conocimiento; fueron completos, en la medida en que no omitieron detalles relevantes en su declaración para el esclarecimiento de la verdad, y además no fueron contradictorios, contrario sensu coincidieron sus versiones entre sí, por lo que están dados los presupuestos necesarios para su plena validez probatoria, según criterio de la Corte Constitucional expuesto en sentencia T-957 del 17 de noviembre de 2006.

Conforme a lo anterior ha de indicarse que la prueba documental, testimonial y de interrogatorio de parte, valorada a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, y le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan atendiendo a los principios que orientan la crítica de la prueba, permite concluir la existencia de la dependencia económica alegada por la demandante, pues quedó acreditado, especialmente con las declaraciones de BERNARDO DE JESÚS CASTAÑO OBANDO y AMANDA MEJÍA DE COLORADO, que el causante era quien velaba económicamente por la aquí demandante, existiendo una dependencia económica respecto de su padre, versiones que, se insiste, coincidente entre sí y con lo dicho por la demandante en su interrogatorio de parte, demostrándose una subordinación económica relevante, esencial y preponderante frente al causante para el momento del fallecimiento de este.

Bajo el contexto anterior, le asiste razón al A quo al reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante, causada por el fallecimiento de su padre Fabio de Jesús Tangarife Molina.

Ahora, en cuanto a lo alegado por la recurrente frente a la posible incompatibilidad entre la pensión reconocida en la sentencia y la reconocida por Colpensiones por el fallecimiento de la madre de la accionante, ha de indicarse que si bien en el proceso no se demuestra que los recursos de la pensión de sobrevivientes del padre sean insuficientes para la subsistencia digna de la accionante, la pensión que por sustitución de la señora madre de la accionante le fuera concedida a la demandante por parte de COLPENSIONES con posterioridad al fallecimiento del padre, no puede de modo alguno esta judicatura interferir con una prestación económica que fue concedida por vía administrativa, quedando en manos de la administradora pública accionada la eventual revisión de esta última bajo parámetros de ley, pues la prestación pretendida dentro del trámite que ocupa la atención de la Sala, y dado que se itera la dependencia económica está demostrada frente al padre y esta debe acreditarse es al momento del fallecimiento del causante de que la actora dependía, como efectivamente se hizo, es frente a esta prestación de sobrevivientes que debe ser objeto de pronunciamiento en esta sentencia, razón por la cual el argumento de la alzada no es acogido.

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión **CONFIRMARÁ** en este punto la decisión proferido por el Juez de primera instancia, pues se acreditaron en suficiencia los presupuestos normativos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante causada por el fallecimiento de su padre Fabio de Jesús Tangarife Molina, la cual fue reconocida en debida forma.

Frente a la condena a los intereses moratorios, la cual se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé su causación en favor del pensionado, por la tardanza de la administradora de pensiones, en el pago de las mesadas pensionales, dentro de los términos legales. Al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia ha indicado que el estado de mora surge una vez vencido el término que la ley les concede a las administradoras de pensiones para pronunciarse sobre el reconocimiento y pago de una pensión. No basta la reclamación por parte del interesado o beneficiario, pues debe correr el término previsto legalmente para que la administradora de respuesta a la solicitud, y sólo hasta

ese momento si no se ha satisfecho la obligación o se hace tardíamente, es dable predicar incumplimiento de su parte¹².

Conforme al artículo 1 de la Ley 717 de 2001, las administradoras de pensiones cuentan con un plazo máximo de 2 meses para resolver las solicitudes de pensión de sobrevivientes y pagar las mesadas pensionales reconocidas.

Por lo que al haberse presentado la solicitud el 21 de diciembre de 2012¹³, sin que se hubiese reconocido la prestación, se generaron los intereses moratorios en favor de la accionante a partir del 22 de febrero de 2013, tal y como lo indicó el A quo, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia en este punto

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada por resultar vencida con la formulación de su recurso de apelación. Se fijan las agencias en derecho en favor de la demandante en la suma de \$908.526.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **CONFIRMA** la decisión que se revisa en apelación y consulta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Se fijan las agencias en derecho en favor de la demandante en la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

¹² Sentencias del 4 de junio de 2008, Radicado 32.141 y SL de 15 de agosto de 2018, Radicado 70.851

¹³ Fl.20

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 062 de abril 15 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL
GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL**

**SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-
ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

bafa0856c44058a8085322d17e524022debf33bb19064ca3ecaba70593cd0936

Documento generado en 14/04/2021 02:51:33 PM